



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº **036** – 2017 – GRJ/GRI

Huancayo, **24** ENE 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTOS:

Informe Legal N° 012-2016-GRJ/ORAJ de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, Resolución Gerencial General Regional N° 004-2016-GRJ/GGR, Memorando N° 095-2016-GRJ/SG, y el Informe Técnico N° 006-2017-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, y los datos generales del proceso:

Identificación del procesado.

Apellidos y Nombres	Cargo	Desde	Hasta	Dirección	Resolución	DNI
Ing. NAKANDAKARE SANTANA Julio Buyu	Sub Gerente y Liquidación de Obras	08/06/2015	03/01/2017	Psj. Argentina N° 169- San Carlos-Hyo	Res N° 187- 2015-GRJ-PR	40426583

CONSIDERANDO:

DE LOS HECHOS:

Que, según se tiene de la Resolución Gerencial General Regional N° 004-2016-GRJ/GGR, de fecha 20 de Enero del 2016, emitida por el Gerente General del Gobierno Regional de Junín, los cargos imputados en contra del Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana; se sustenta en lo siguiente:

"(...)

Mediante Carta N° 032-C.ARIES-RVSM-RC-2015, de fecha 31 de diciembre del 2015, el Sr. Richard Vitalio Sosa Meza en su condición de representante común del Consorcio Aries, hace llegar la solicitud de ampliación de plazo N° 02, adjuntando para ello el informe N° 02 WSG/RO-2015, solicitando al Inspector de Obra Ingeniero Pedro Tacza Dorregaray, la ampliación de plazo por Diecinueve (19) días calendario, para la Obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. 2026, en el Centro Poblado Boca Sonaro – Distrito de Pangoa – Provincia de Satipo – Región Junín";

Que, con Carta N° 035-2015- C. ARIES-RVSM-RC-2015, de fecha 04 de Enero del 2016, el Sr. Richard Vitalio Sosa Meza en su condición de representante común del Consorcio Aries, hace llegar el compromiso mediante la cual RENUNCIA al cobro de Gastos Generales que se generen por la ampliación de plazo N° 02 de la obra señalada líneas arriba;

Que, mediante Carta N°. 003-2016-CONSORCIO ALFA/PETD-SD de fecha 11 de Enero del 2016, el Ingeniero Pedro Enrique Tacza Dorregaray, en su calidad de Supervisor de Obra, adjunta al informe técnico N° 02-2016-CONSORCIO ALFA/PETD-SO luego de la revisión, evaluación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, entre otros aspectos expone lo siguiente:

G. R. I.	
REG. N°	1885699
EXP. N°	00950082

- El contratista, presento al Gobierno Regional Junín la Carta N° 32-C.ARIES-RVSM-RC-2015 de fecha 31 de Diciembre del 2015 mediante el cual solicita autorización de ampliación de plazo N° 02, sustentando en la causal caso fortuito fuerza mayor según el artículo 200° - causales de ampliación de plazo del RLCE.
- En ese sentido y habiendo realizado la revisión y la evaluación de dicha documentación opino procedente la solicitud de Ampliación de plazo N° 02, por 19 días.

Que, con Carta N° 006-2016-CO-EDT de fecha 11 de Enero del 2016, la Arquitecta Emperatriz de la Cruz Tapia, en su condición de coordinadora de Obra concluye:

"Aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 02, del contratista CONSORCIO ARIES, por 19 días, sin reconocimiento del pago de mayores gastos generales".

Que, mediante Reporte N° 09-2016-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 11 de Enero del 2016, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye:

"Considerando que la solicitud de ampliación de plazo N° 02 DEL CONTRATISTA consorcio aires, se encuentra debidamente sustentado, OPINO PROCEDENTE, su respectiva aprobación, por el plazo de 19 días calendarios, sin el reconocimiento de mayores gastos generales". (...)"

DE LOS ANTECEDENTES:

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:

Que, conforme se desprende de la Resolución Gerencial General Regional N° 004-2016-GRJ/GRI, de fecha 20 de enero de 2016; en su artículo segundo resuelve: **"DISPONER** la remisión de una copia de todos los actuados, a Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la sede, a fin que de acuerdo a sus atribuciones y facultades precalifique la presuntas faltas, al haberse actuado con negligencia en la tramitación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02; siendo responsabilidad por parte de:

- El Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras – Julio Buyu Nakandakare Santana, por no Evaluar y controlar los actos administrativos de su área". (...)"

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

El Gobierno Regional Junín y el "CONSORCIO ARIES", suscribieron el Contrato N° 168-2015-GRJ-GGR, de fecha 26 de Agosto del 2015, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. 2026, en el Centro Poblado Boca Sonaro – Distrito de Pangoa – Provincia de Satipo – Región Junín", por el monto total de S/. 1'567,593.85 (Un Millón Quinientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Tres con 85/100 Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario.

TIPIFICACION DE LA FALTA:

Se debe tener en cuenta; que en materia sancionadora el **principio de legalidad** impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no



está determinada por la ley. Como lo ha expresado el Tribunal Constitucional (Cfr. Expediente N.º 010-2002-AI/TC), este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (*lex scripta*), que la ley sea anterior al hecho sancionado (*lex praevia*), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (*lex certa*).

Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previsto en la Ley N.º 30057 y su Reglamento.

Los hechos descritos, constituyen faltas de carácter administrativo; que no es más ***“Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores”***; en el presente caso, se habría vulnerado el artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil, que prescribe:

Artículo 85.- Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

- a. El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.
- d. La negligencia en el desempeño de las funciones.
- q. Las demás que señale la ley.

Artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil	Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, y q) Las demás que señale la ley”.
--	--

Norma que resulta concordante con lo establecido para el caso, en el acápite 98.3 del art. 98º del Reglamento de la Ley N.º 30057, aprobado por D.S. N.º 040-2014-PC, que prescribe: 98.3. *La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo.*



De igual forma; lo establecido, en los incisos a), c) y d) del artículo 39º-Ley 30057, Ley de Servicio Civil, que prescribe: *“Son obligaciones de los servidores civiles, las siguientes: (...) a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público, c) informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia que ponga en riesgo o afecte el logro de los objetivos institucionales o la actuación de la entidad, y d) Salvaguardar los intereses del Estado (...)”*.

Esto al haber, transgredido:

Lo dispuesto en el artículo IV numeral 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N.º 27444, “Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. Es así, que es pertinente tener en consideración que en el Estado Constitucional Democrático, el poder público, está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración

deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos, como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

El artículo 84° sobre Naturaleza y funciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Junín, literales a) y l), señala: “Dirigir, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos y obras de inversión de acuerdo a la normatividad legal vigente.

l) Evaluar y controlar los actos administrativos de su área.

Al respecto; el numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, y modificado por la Ley N° 29873, establece: **“El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual”**

En ese sentido; los numerales 1, 2 y 3 del artículo 200° del RLCE, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece: **“De conformidad con el artículo 41 de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al contratista. 2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados (...).”** Asimismo; el artículo 201° de éste reglamento, dispone: **“Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameritan ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo”.**

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contado desde el siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad (...).”

Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-






Que, es pertinente considerar que el funcionario público es el ciudadano elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos de más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Ejerce representación de la voluntad del Estado en virtud de una especial delegación, transmitida en principio por Ley, y posteriormente por decisión administrativa contenida en una Resolución. Adopta decisión y puede en ciertos casos, estar facultado para resolver. Proyecta su actividad al exterior del esquema organizacional en virtud de representación.

En la Sentencia N.º 090-2004-AA/TC, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Para mejor resolver los hechos imputados, se debe tener en cuenta:

Que el "atraso"¹ constituye un retraso o retardo en el cumplimiento de las prestaciones, sin llegar a ser una paralización. En esa medida, corresponde a la Entidad determinar cuándo el contratista ha interrumpido el cumplimiento de las obligaciones a su cargo y en qué casos viene ejecutándolas a un ritmo menor. No obstante ello, debe considerarse que, cuando el hecho generador del atraso o paralización sea originado por razones ajenas a su voluntad, el contratista podría solicitar la ampliación del plazo por la configuración de cualquiera de los dos supuestos². **Al respecto:** debe indicarse que los párrafos primero y segundo del artículo 202 del Reglamento regulan los efectos de la ampliación del plazo de ejecución en los contratos de obra, conforme a lo siguiente:

"Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los casos de prestaciones adicionales de obra.



*Sólo cuando la ampliación de plazo sea generada por la **paralización** total de la obra por causas ajenas a la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial, según el caso.*

Como se aprecia, las disposiciones citadas establecen el pago de mayores gastos generales variables³ al contratista como consecuencia económica de la

¹ Según el Diccionario de Lengua Española (DRAE), Vigésimo Tercera Edición, "atraso", en su primera acepción, es "1. m. Acción y efecto de atrasar", siendo necesario precisar que el término "atrasar" significa, en su primera y séptima acepción, respectivamente, "1. tr. Retardar. U.t.c. pml." y "7. pml. retrasarse (llegar tarde)".

² Cabe señalar que, en el caso de obras sí resulta necesario distinguir entre paralización y atraso, pues dependiendo de la calificación que se le otorgue al hecho o circunstancia que origina la ampliación del plazo de ejecución de la obra, se definirá la forma de pago de los gastos generales.

³ De acuerdo con el numeral 29 del Anexo Único del Reglamento, Anexo Definiciones, los gastos generales variables "Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra y por tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la prestación a cargo del contratista."

aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra, con el objeto de reconocer los mayores costos indirectos que debe asumir el contratista, derivados del incremento del plazo de obra.

Adicionalmente, es importante indicar que, además del otorgamiento de un plazo adicional, la aprobación de una ampliación del plazo en un contrato de supervisión genera determinados efectos económicos que tienen por objeto equilibrar las condiciones económicas inicialmente pactadas, en atención al Principio de Equidad⁴.

Así, el penúltimo párrafo del artículo 175 del Reglamento señala que *"Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista, además del gasto general variable, el costo directo."* (El resaltado y subrayado es nuestro).

Ahora bien, debe precisarse que un contrato de supervisión bajo el sistema a suma alzada no impide que se amplíe su plazo de ejecución y, por tanto, tampoco impide que se reconozcan los efectos económicos de la referida ampliación.

De esta manera, a pesar de que en los contratos a suma alzada el postor efectúa su oferta por un monto integral y por un determinado plazo de ejecución⁵, la aprobación de una ampliación de plazo en un contrato de supervisión bajo el sistema a suma alzada genera el reconocimiento de los gastos generales y el costo directo derivados de dicha ampliación, siempre que se encuentren debidamente acreditados, en atención al Principio de Equidad.

Que, de lo esgrimido líneas arriba y documentos válidamente incorporados al proceso, la falta disciplinaria imputable al **Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana**, como Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; sería, por su actuar negligente en el ejercicio de sus funciones, al haber emitido el Reporte N° 09-2016-GRJ/GRI/SGSLO, en la cual opina procedente la aprobación de 19 días calendarios, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, la solicitud del representante común del Consorcio Aries, en cuanto a la ampliación de plazo N° 02, para la obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. 2026, en el Centro Poblado Boca Sonaro – Distrito de Pangoa – Provincia de Satipo – Región Junín"; pese a que la tramitación de los mismos, se han dado fuera del plazo vigente contractual, no dándose cumplimiento a la normativa vigente respecto a los plazos establecidos de los trámites requeridos, excediéndose el plazo de siete (07) días que el artículo 201 del RLCE exige; sin embargo, recomienda opinando dar continuidad a ésta solicitud; debiendo tenerse en cuenta que entre sus funciones era evaluar y controlar los actos administrativos de su área los mismos que no ha cumplido; más aún, ha obviado las formalidad dispuestas en el artículo 173.1 de la Ley 27444, por cuanto no ha cumplido con fundamentar su opinión en forma clara y precisa estas cuestiones planteadas; consecuentemente, estos actos trajo como

⁴ El literal l) del artículo 4 de la Ley, al definir el Principio de Equidad, señala que *"Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general."* (El subrayado es agregado).

⁵ En este punto, es importante señalar que, en atención a la naturaleza accesoria que tiene el contrato de supervisión respecto del contrato de obra y, en esa medida, que los eventos que afectan el plazo de ejecución de una obra pueden afectar el plazo de ejecución del contrato de supervisión, el empleo del sistema a suma alzada podría no ser el más óptimo para definir la forma de pago en los contratos de supervisión pues, si bien las prestaciones del mismo pueden estar definidas, el plazo de ejecución de la supervisión depende del plazo de ejecución de la obra, el cual suele variar a lo largo de su ejecución, por lo que sería mejor emplear un sistema más adecuado a dichas circunstancias como podría ser el sistema de tarifas.



consecuencia la generación de mayores gastos generales para la culminación de la mencionada obra, por consiguiente perjuicio económico para la entidad.

Que, estando a lo antes esgrimido; si bien es cierto, la falta disciplinaria que sería imputable a éste administrado, tendría sustento a la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Estado; sin embargo, siendo ésta obra de gran envergadura para beneficio de la sociedad, en la cual se busca una mejor infraestructura de centros educativos para el aprendizaje de nuestra niñez, consideración que se debe tomar en cuenta, para efectos de determinar la sanción, que debe ser proporcional a la falta cometida; y, no existiendo la concurrencia de varias faltas, como antecedentes consentidas o ejecutoriadas de ser reincidente en la comisión de faltas; una posible sanción puede servir para advertirle sobre las posibles consecuencias que puede acarrear la persistencia en su conducta infractora; consecuentemente, la posible sanción a imponerse al involucrado sería **amonestación escrita**, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 87, e inciso a) del artículo 88°, ambos de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil; y artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por otra parte; se puede advertir, que la responsabilidad recaída en contra de éste administrado resulta compartida con la Arq. Emperatriz De La Cruz Tapia, Coordinadora de la Obra, por haber tramitado el expediente administrativo de manera negligente; e Ing. Pedro Enrique Tacza Dorregaray, Supervisor de Obra, por haber emitido informe expresando opinión respecto a la ampliación de plazo, excediendo los plazos permitidos por ley; por lo que debe extraerse copia de todo lo actuado y remitirse a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional Junín, para que de acuerdo a sus funciones, tome las acciones pertinentes del caso, a fin de deslindar responsabilidades en contra de éste administrado.

ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE:

Que, el Órgano Instructor Competente para disponer el Inicio del PAD; es el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín.

PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que los procesados presenten sus descargos en el proceso se deberá brindar a los procesados el plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos escritos ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:

Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

“Artículo 96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

Artículo 96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

Artículo 96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.”;

Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y **estando a lo dispuesto por esta Gerencia Regional de Infraestructura**, y; en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el siguiente servidor:

- ✓ **Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana**, como Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; por haber incurrido en presunta falta administrativa conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales: **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; d) La negligencia en el desempeño de las funciones; y q) Las demás que señala la ley.**

ARTICULO SEGUNDO.- EXTRAÍGASE copias de todo lo actuado, y remítase al Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, para que de acuerdo a sus funciones, tome las acciones pertinentes del caso, a fin de deslindar responsabilidades en contra del Arq. Emperatriz De La Cruz Tapia e Ing. Pedro Enrique Tacza Dorregaray, contratados por tercero en la entidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo al servidor comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándoles el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 24 ENE 2017
Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Ayer. A. Antoniera Vidallon Robles
SECRETARIA GENERAL